

*Quizá en octubre no haya milagros pero,
al menos en Bolivia, hay movilizaciones.*

Hace cuatro años, octubre quedó marcado por la «guerra del gas» y la caída del gobierno de Goni Sánchez de Losada. Se consolidaba así un ciclo de ascenso popular cuyo hito previo fue la «guerra del agua» en Cochabamba, y que culminaría con la elección de Evo Morales como primer presidente indígena de Bolivia a fines de 2005.

Este año, dos movilizaciones casi simultáneas han expresado de manera dramática los cambios producidos en la agenda sociopolítica boliviana.

Conforme los ánimos se fueron caldeando, la movilización se transformó en un ejercicio de justicia popular: decenas de locales fueron tomados, saqueados, incendiados.

El martes 16 de octubre, cientos de pobladores de El Alto se congregaron desde muy temprano para bloquear la autopista que vincula la ciudad aimara con La Paz. Los motivaba la demanda de mayor celeridad en la ejecución de obras públicas, en particular aulas para una ciudad cuyo crecimiento desborda cotidianamente cualquier previsión. En la tarde, el retorno de los

manifestantes se transformó en una movilización por las zonas en las que han crecido bares y prostíbulos clandestinos a vista y paciencia de autoridades y policías. Conforme los ánimos se fueron caldeando, la movilización se transformó en un ejercicio de justicia popular: decenas de locales fueron tomados, saqueados, incendiados. Las acciones continuaron hasta el jueves sin que la Policía se atreviese a intervenir, limitándose el desprestigiado municipio a anunciar la revisión de la zonificación de la ciudad.

El jueves 18, Santa Cruz fue escenario de una batalla campal en los alrededores del aeropuerto internacional de la ciudad. Este había sido militarizado por el gobierno nacional como respuesta a la crisis generada en días

previos a raíz de la suspensión de los vuelos internacionales debido al intento de las autoridades regionales de cobrar impuestos a las líneas áreas al margen de los mecanismos nacionales. Acusadas de corrupción, las autoridades regionales de aviación fueron remplazadas por otras que no contaron con el aval ni de la Prefectura ni del Comité Cívico. Convocados por ambos, cientos de cruceños se dirigieron a «recuperar» su aeropuerto. Al final, el gobierno nacional cedió: se levantó la militarización, pero no queda claro quién queda a cargo del mencionado aeropuerto.

A primera vista, estos episodios no son sino la continuidad de la turbulenta historia previa de un país marcado por la inestabilidad y el conflicto abierto. Sin embargo, uno y otro expresan cambios significativos en la agenda, si no en los procedimientos a través de los cuales la política se despliega y se resuelve en Bolivia.

El primero de ellos refleja bastante bien la demanda por transformar en bienestar los indudables logros económicos recientes. El segundo expresa la pugna aún no resuelta en torno a la forma que tomará el Estado que está renaciendo sobre la base del viraje nacionalista del gobierno de Evo Morales. Se reconozca o no, en los cimientos de ambos hay dos hechos macizos: uno, el poder ha comenzado a cambiar de manos; dos, después de años de penuria y quiebra fiscal, el Estado nacional vuelve a ser una posibilidad.

No es el caso resumir en unos párrafos una de las historias políticas más ricas de la región. Simplemente, anotar que el proceso reciente es ininteligible sin la referencia a la dialéctica colonialidad-resistencia que viene desde el siglo XVI y tiene hitos en el siglo XVIII e inicios del siglo XX, así como a los procesos nacionalistas previos, en particular la revolución de 1952. Sin obviar la influencia de los cambios demográficos y económicos de las décadas recientes –incluyendo los paradójicos efectos del neoliberalismo– y la crisis del sistema político como

efecto del desastre que representó una de las aplicaciones más estrictas del consenso de Washington en el continente.

Lo peculiar de la experiencia boliviana ha sido la capacidad de los movimientos indígenas de ir más allá de sus fronteras y con ello, hacer viable una agenda nacional de cambio,

Los indigenismos no son novedad en los países andinos. Lo peculiar de la experiencia boliviana ha sido la capacidad de los movimientos indígenas de ir más allá de sus fronteras internas y articularse, y con ello, hacer viable una agenda nacional de cambio, cuyo eje ha sido la recuperación de la soberanía nacional sobre

los recursos naturales. Este tránsito no está del todo resuelto. No es casual que tanto el gobierno como el movimiento político que lo sustenta –el Movimiento al Socialismo (MAS)– estén tensionados por la opción entre un Estado nacional centralizado para poder redistribuir y la idea de un Estado multinacional conformado por un archipiélago de autonomías indígenas.

Tampoco son novedad los vacíos de poder y las crisis generalizadas de los sistemas políticos, en particular de los partidos tradicionales. ¿Cómo así la crisis boliviana no devino en un nuevo escenario para la antipolítica? Es difícil encontrar una respuesta simple. En la realidad, se conjugaron los procesos de resistencia de movimientos sociales derrotados pero no diezmados, la resignificación de las identidades y las instituciones –caso de los sindicatos–, así como la existencia de un pensamiento crítico que nunca abdicó de su rol. Pero no solo eso: también el impacto de procesos migratorios –hacia las ciudades, de ahí la expansión de El Alto; hacia nuevas actividades productivas: la coca en el Chapare y los yungas, la agricultura de exportación en el oriente–, así como de algunas de las reformas promovidas en los años del neoliberalismo: la expansión de la educación y, sobre todo, la generalización de la «participación popular» en los espacios locales.

Y si a esto sumamos los cambios en el escenario internacional –basta mencionar los nombres de los gobernantes con los que Evo tiene que relacionarse: Lula, Kirchner, Bachelet y, por supuesto, Chávez–, tendremos un cuadro completo de la oportunidad para el viraje. Nada de esto niega la sorpresa del proceso –para confirmarlo, bastaría interrogar a los protagonistas acerca de cómo se veían a sí mismos hacia mediados de 2004– ni la calidad de algunos de sus líderes.

Si algún esbozo estratégico tenían los gobernantes de hoy, este voló por los aires entre octubre de 2003 e inicios de 2005. En el esquema, el primer gobierno indígena debía venir luego de una asamblea constituyente llamada a «refundar la república». El gobierno de transición –cuyo principal acierto fue la convocatoria a un referéndum nacional sobre el gas– no resistió las presiones de ambos flancos y renunció sin cumplir el plazo constitucional. El nuevo gobierno llegó antes que el «nuevo Estado».

Casi dos años han transcurrido desde entonces. Sin duda, se han producido cambios cuyos impactos son evidentes en diversos ámbitos. Basta ver las fotos del primer gabinete o del nuevo congreso para constatar que, en términos étnicos y sociales, la radicalidad del cambio en Bolivia deja atrás a cualquiera de los procesos revolucionarios latinoamericanos previos. Por otro lado, las principales demandas de las movilizaciones sociales comenzaron a transformarse en políticas: nacionalización (o renegociación) del gas, «reforma» de la ley de reforma agraria, convocatoria a la asamblea constituyente. Otra novedad para la región: un gobierno que cumplía escrupulosamente con su plataforma electoral.

Al menos hasta inicios de este año, todos coincidían en reconocer que los cambios, lejos de inestabilizar la economía, le habían dado una vitalidad desconocida por décadas. Bolivia cerró el año 2006 con récord de reservas y de exportaciones, superávit fiscal y una deuda externa reducida a la mitad. Más importante aún: todas las empresas afectadas por la «nacionalización» del gas habían suscrito nuevos contratos, a la vez que seguían avanzando nuevos proyectos mineros de gran envergadura. A diferencia de lo sucedido en países como el Perú, los años de oro del neoliberalismo representaron un magro crecimiento anual del PBI (2% como promedio para la década). El año 2006 se cerró con un crecimiento de 4,6%. Estas cifras reflejan la situación de la llamada «economía formal», apenas un tercio de la economía real boliviana.

A lo largo y ancho de la sociedad se vivió un cambio en el estado de ánimo, en las percepciones acerca

Se vivió un cambio en el estado de ánimo, en las percepciones acerca del presente y del futuro. Hoy, sin embargo, la sensación de estar otra vez encaminándose al filo del abismo convive con aquel limitado optimismo.

del presente y del futuro. De esto dan cuenta parcialmente las encuestas que le otorgan a Evo Morales, hasta agosto de este año, un apoyo de alrededor de 60% en el eje urbano del país –El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz–, con un pico de casi 90% en El Alto y su opuesto en Santa Cruz, con 25%. A pesar de conflictos muy serios durante 2006 –entre mineros en Huanuni, en Santa Cruz y Cochabamba– el «índice de confianza», según Apoyo, se mantuvo en la franja intermedia. Hoy, sin embargo, la sensación de estar otra vez encaminándose al filo del abismo convive con aquel limitado optimismo.

Esta es una revolución liderada por «otros». De ahí que en la conversación cotidiana se les atribuya «resentimiento», afanes de «revancha», «racismo invertido».

Es cierto que hay problemas de gestión debidos a las taras del «viejo Estado» y/o a la impericia de los «nuevos gobernantes», así como enormes dificultades para proponer y viabilizar acuerdos en torno a asuntos relativamente simples. Sin embargo, los desencuentros en la política boliviana tienen que ver con algunos problemas de fondo que apenas si han comenzado a plantearse.

Quienes conocen la historia política previa –en particular la revolución de 1952 liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)– no tardan en reconocer que el relevo en curso en la política boliviana tiene similitudes y diferencias con aquel. Y que si bien la propuesta del MAS y de Evo es más limitada en su alcance que la de entonces, el relevo es más radical por ser, antes que generacional, social y étnico. La del 52 fue una revolución liderada por los hijos de la élite y la clase media, desencantados por los fracasos previos del Estado boliviano. Esta es una revolución liderada por «otros». De ahí que en la conversación cotidiana se les atribuya «resentimiento», afanes de «revancha», «racismo invertido», etcétera. Y que detrás de todo no sea difícil percibir los ecos del «gran miedo» que los habitantes de las ciudades han criado frente a los «cercos indígenas» –desde Túpac Katari en el siglo XVIII hasta la guerra del gas en 2003–.

Es cierto que el gobierno de Evo Morales no ha hecho todo lo posible por desmontar estos miedos e incorporar a «otros». Pero más importante que esto ha sido la estrategia reactiva que diversos grupos tradicionales

han puesto en marcha después del primer impacto del gobierno y sus resultados. Partiendo por reconocer que no hay en el país una oposición política programática alternativa al gobierno –¿cómo oponerse a la nacionalización del gas o al nuevo rol del Estado en la economía?–, los movimientos opositores se han desenvuelto entre dos tácticas: el recurso al bloqueo formal de algunas reformas y/o la defensa de aspectos procedimentales de la deteriorada democracia representativa, y la exacerbación de los regionalismos aprovechando improvisaciones y carencias de un proceso de descentralización que en el país lleva ya dos décadas.

La primera táctica no ha dado muchos resultados. Más allá de algunos sectores atemorizados de clases medias, no son muchos los dispuestos a movilizarse en defensa de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, menos aún de los fueros parlamentarios. El asunto de exigir dos tercios de los votos en la Asamblea Constituyente para aprobar el nuevo texto tuvo cierta acogida, pero al final desembocó en que la aprobación definitiva será por la vía de un referéndum en el que el MAS sigue teniendo las mejores posibilidades de ganar.

La segunda táctica es la que mayores réditos les ha dado a los opositores. Paradójicamente, a partir de los efectos que las medidas nacionalizadoras han tenido sobre las dinámicas regionales.

Para entender esto hay que tomar nota de los efectos de la descentralización en Bolivia. Como resultado de diversas leyes y compromisos internacionales, el Estado boliviano tiene establecidos mecanismos de asignación de recursos que privilegian a municipios y gobiernos departamentales. Esto comenzó con la ley de participación popular (1994), que asignó 20% de los recursos fiscales a los municipios. Y se incrementó con sucesivas leyes de descentralización administrativa, de asignación de recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos, así como del alivio de la deuda externa. En síntesis, se calcula que, hoy en día, 75% de los recursos fiscales es manejado por municipios y gobiernos departamentales. Y dado que estos recursos se asignan según diversos criterios, esta distribución se ha convertido en una fuente de creciente inequidad entre regiones. Así tenemos no solo un Estado nacional que sigue siendo deficitario –limitados recursos y abultada cuenta de gastos corrientes– mientras las regiones han pasado a tener superávit, sino también una marcada diferencia entre regiones «ricas» –particularmente las del oriente, que son sede de las actividades extractivas y exportadoras– y regiones «pobres» –el occidente andino y altiplánico–.

Es sobre esa base que la activa coordinación de los prefectos y los comités cívicos –curiosa institución heredera de las «juntas de notables» del siglo XIX– de los departamentos del oriente se ha concentrado en exacerbar un autonomismo regional que, en sus expresiones más radicales, desemboca, si no en la escisión, en una propuesta de república federal. A la vez, ha buscado tender alianzas más allá, apoyando la demanda de Sucre de volver a ser la capital plena de la República –condición que perdió a inicios del siglo XX a manos de La Paz–, así como a otros movimientos de élites reactivas en ciudades como Cochabamba. Frente a esto, no hay una respuesta coherente. Lo más avanzado es contraponer a las «autonomías departamentales» las «autonomías indígenas», dando lugar a un complicado sistema en el cual las atribuciones de gobierno se distribuyen entre cuatro instancias: nacional, departamental, municipal y «originaria».

Dado que el debate en la Asamblea Constituyente está suspendido, no es extraño que los avances de unos y otros tengan como escenario principal las calles, plazas, carreteras.

Dado que el debate en la Asamblea Constituyente está suspendido, no es extraño que los avances de unos y otros tengan como escenario principal las calles, plazas, carreteras. Es poco lo que, a estas alturas, se puede esperar de la Asamblea Constituyente como instancia «refundadora» de la República. En caso de que logre culminar su trabajo, presentará al país o un texto lleno de acuerdos ambiguos o dos propuestas que harán más intensa la polarización.

Y es que la llamada «refundación» no es un problema de textos, ni siquiera de votos. Es un problema más complejo para el cual hay que recurrir al concepto gramsciano de hegemonía. Se usa poco hoy, dada la moda intelectual vigente, que privilegia entender la política como negociación y sucesión de acuerdos. El olvido está siendo cuestionado por la realidad –no solo en Bolivia– en la medida en que se toma conciencia de que la visión «acuerdista» reposaba sobre el reconocimiento –explícito o tácito– de una hegemonía liberal hoy puesta en cuestión.

La complejidad de la construcción de la hegemonía –con sus momentos de fuerza y sus momentos de consenso– es lo que subyace a los avatares cotidianos de la política boliviana. La cuestión central en curso se

puede resumir en un par de preguntas: ¿hasta qué punto la emergencia indígena podrá conquistar espacios económicos, sociales, culturales y políticos? ¿Hasta qué punto las élites previas permitirán ser desplazadas de tales espacios? Y en todo esto, ¿hacia dónde fluirán los nuevos recursos que resulten del viraje nacionalista? Es decir, ¿cómo hacer para que la renta se transforme en crecimiento económico y/o bienestar?

En relación con estas preguntas, las propuestas son aún bastante gaseosas. Más allá de ideas generales acerca de pasar a una «economía de base ancha» en una «Bolivia productiva», no hay muchas propuestas concretas. Entre otras razones, porque durante las últimas décadas se han producido algunas modificaciones estructurales irreversibles que hacen inviable el viejo desarrollismo. No solo el deterioro –hasta casi la inviabilidad– de las economías agropecuarias andinas, sino también la apertura del mercado, que ha generado nuevos circuitos y formas de supervivencia de los cuales dependen millones de bolivianos. Sin mencionar el peso decisivo que tienen el millón (si no más) de bolivianos que viven y trabajan fuera del país.

Hubo quienes pensaron que la victoria electoral marcaba la resolución del «empate catastrófico» de la política boliviana a partir de 2000. Y que sería en el terreno de la gestión que se terminaría de consolidar el cambio de manos del poder. Es cierto que la gestión no ha sido óptima, pero tampoco es desastrosa. La primera apreciación pecaba de excesivo optimismo. Ni las victorias electorales –sumando a la del 2005 la que obtuvo el MAS en las elecciones a la Asamblea Constituyente– ni las victorias políticas –tales como la renegociación de los contratos del gas– han sido suficientes para consolidar una nueva hegemonía. Los efectos fiscales de la nueva política sobre un Estado mal descentralizado les dieron a las viejas élites inesperadas posiciones de poder que estas han sabido utilizar como primera línea de resistencia frente a los cambios.

Más allá de la incertidumbre propia de la política en cualquiera de sus manifestaciones, en la situación boliviana se suman otros factores que suelen ser obviados en los análisis más frecuentes.

Los más importantes están relacionados con la sociedad, o mejor con las sociedades que conviven en la «abigarrada» (el término es de René Zavaleta) Bolivia. Hasta el momento actual, el gobierno, y en particular Evo Morales, han demostrado tener un núcleo duro de apoyo que sobrepasa 50% de la población, que está

muy cohesionado y que tiene una gran capacidad de movilización. Contra lo que algunos pronosticaban, no se ha producido un desborde de expectativas que ponga en jaque al gobierno por la vía de demandas excesivas. El hecho de que este bloque popular se mantenga tiene como una de sus explicaciones la virulencia de la oposición y un fuerte sentido de pertenencia y de reivindicación histórica.

¿Qué problemas tiene este bloque? En primer lugar, su desigual presencia nacional. Muy fuerte en el Altiplano y algunas zonas intermedias, es débil en el oriente. Cabe preguntarse si no hay también ahí –más allá de minorías beligerantes y activas entre indígenas y colonos organizados– «masas silenciosas» que toleran el liderazgo de las élites tradicionales pero que están cada vez más distantes de los proyectos de estas. En segundo lugar, la diversidad de sus demandas. Fuertemente cohesionados en torno al rechazo al neoliberalismo y el reclamo de la nacionalización de los recursos naturales, se dispersan cuando se trata de plantear alternativas, al punto de llegar a conflictos muy violentos como el que se suscitó entre los mineros informales (llamados cooperativistas) y los formales (asalariados de la empresa estatal) en Huanuni el año pasado. Por último, y eso es lo más desafiante en el largo plazo, la mayoría de los componentes del bloque viven, se reproducen, acumulan, en la mal llamada informalidad, tanto en el comercio y los talleres de El Alto como en los valles cocaleros o en la minería no formal. ¿Cómo articular esto con una visión de Estado nacional que pretende promover una suerte de «neodesarrollismo»?

Por su parte, los opositores tampoco las tienen todas consigo. Aun cuando no hay estudios claros al respecto, con frecuencia se especula acerca de la real solvencia económica de las élites del oriente. Más allá de la imagen que venden de ser resultado de un espíritu empresarial capitalista moderno, está documentado que su expansión se debió a un flujo de subsidios estatales financiados con los resultados del *boom* petrolero de la década de 1970. Y que, por otro lado, durante los últimos años fueron, si no absorbidas, al menos subordinadas por capitales foráneos, particularmente brasileños. En qué medida todos los opositores puedan resistir a pie firme a un gobierno que ha recuperado capacidad de gasto e inversión es algo que está por verse, y para ello puede ser útil revisar lo sucedido con la oposición empresarial venezolana. No hay duda de que su principal capital es en la actualidad «simbólico»: la mencionada imagen que

proyectan de sí mismos, los proyectos de regiones autónomas y que han alcanzado la prosperidad sobre la base del trabajo, frente al atraso y el «rentismo» andino, etcétera. Pero también en ese nivel tienen su talón de Aquiles: al menos en sus sectores más beligerantes, el racismo lo llevan a flor de piel. Sus formas de organización y representación son tremendamente elitistas, lo cual les genera problemas diversos en sus propias regiones.

Previamente se hizo alusión al carácter irreversible de algunos cambios económicos de factura liberal que marcan los límites de cualquier proyecto económico de mediano y largo plazo en Bolivia.

También habría que marcar continuidades y rupturas en el terreno de la vida social y la política para tener una hoja de ruta adecuada. No hay duda de que, con mayor intensidad que en los demás países andinos, sobreviven y se reproducen instituciones y costumbres fuertemente comunitarias. Y que es en ellas donde cotidianamente se construyen los sentidos y opiniones que alimentarán la acción social y política. Pero también es cierto que hay una mayor individuación al interior de ellas y que se han roto las adscripciones unívocas: el mismo individuo es «comunario» (término boliviano por comunero) y/o poblador urbano (y por tanto comerciante, tallerista o eventual) y/o cocalero sindicalizado, cuando no migrante y trabajador de la construcción en Buenos Aires considerada la segunda ciudad aimara del mundo. En este marco, las opciones tenderán a articular la «identidad fuerte» con la «negociación pragmática». Por otro lado, es también un hecho que la política nacional se desenvuelve de acuerdo con el modelo sindical que tan brillantemente analizara Zavaleta en un momento. Y esto vale para los movimientos sociales emergentes tanto como para los movimientos reactivos que lideran las élites regionales. El pliego de reclamos, la acción directa, las interminables negociaciones, suelen culminar en acuerdos, muchas veces precarios por ambiguos.

Un dato que puede parecer obvio, pero que es decisivo, es la generalizada percepción de que más allá de sus características específicas, lo que Bolivia requiere es un *Estado*. Algo que intentó y llegó a tener a mediados del siglo XX, y que perdió en las décadas recientes. Quizá la fortaleza estratégica más grande de Evo Morales y del movimiento que lo sustenta es que, gracias a su acción, esta posibilidad ha vuelto a plantearse para Bolivia a inicios del siglo XXI. ■